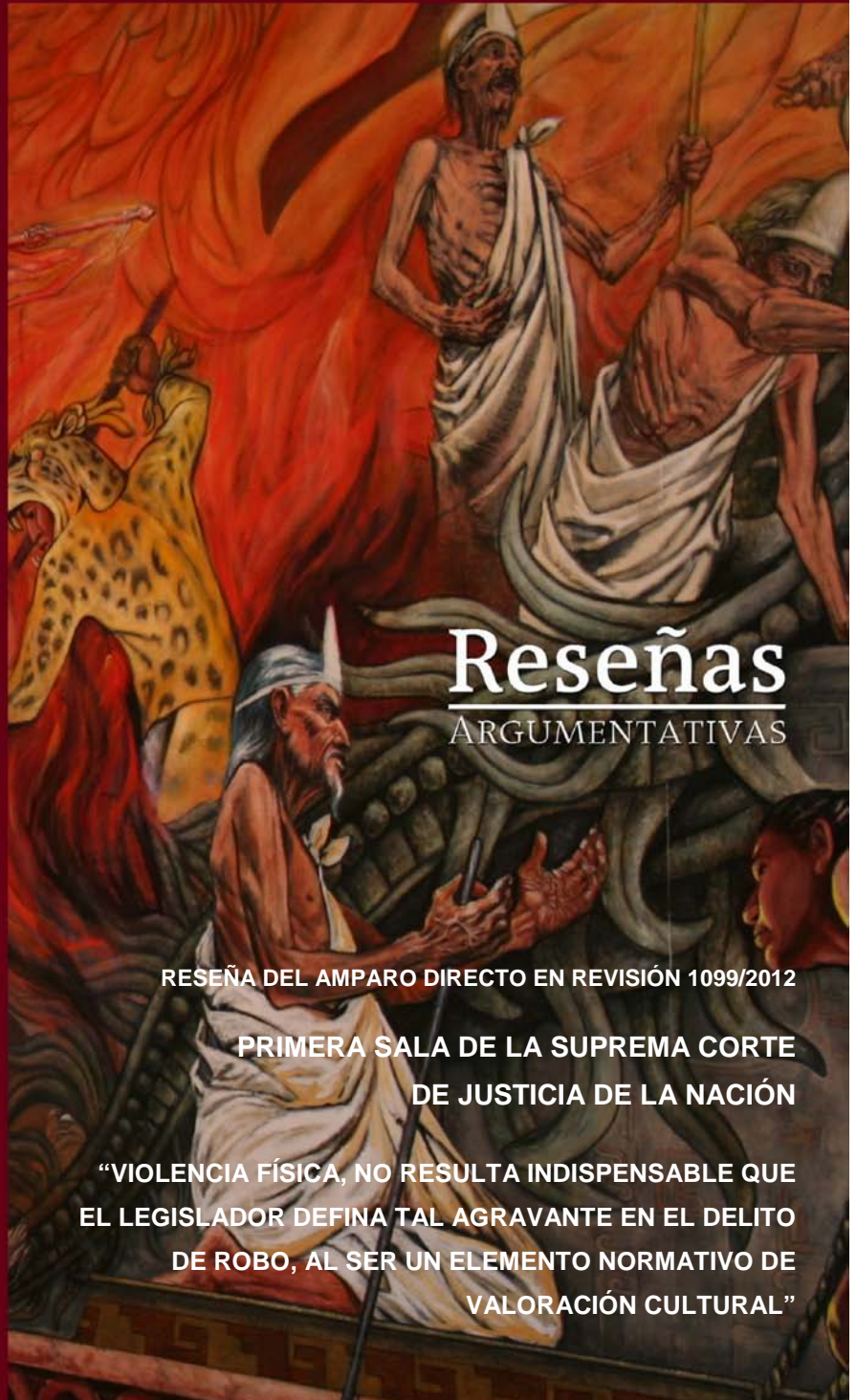




SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Reseñas

ARGUMENTATIVAS

RESEÑA DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1099/2012

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

“VIOLENCIA FÍSICA, NO RESULTA INDISPENSABLE QUE
EL LEGISLADOR DEFINA TAL AGRAVANTE EN EL DELITO
DE ROBO, AL SER UN ELEMENTO NORMATIVO DE
VALORACIÓN CULTURAL”



**RESEÑA DEL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1099/2012
MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ**

**PRIMERA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**VIOLENCIA FÍSICA, NO RESULTA INDISPENSABLE QUE EL
LEGISLADOR DEFINA TAL AGRAVANTE EN EL DELITO DE ROBO,
AL SER UN ELEMENTO NORMATIVO DE VALORACIÓN CULTURAL**

*Cronista: Maestro Saúl García Corona**

Por escrito presentado ante la Primera Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, un adolescente solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la sentencia dictada el 26 de enero de 2012 por la autoridad en comento, por medio de la cual se le declaró responsable de la comisión del delito de robo agravado.

En sus conceptos de violación, el quejoso planteó que el artículo 225, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal,¹ en el cual se basó el acto reclamado, resultaba inconstitucional, en virtud de que violaba la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, establecida en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no definir con claridad qué debía entenderse por *violencia física* como agravante del delito de robo.

* Funcionario adscrito a la Unidad de Crónicas de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.

¹ **ARTÍCULO 225.** Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado; o (...)

Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.




Para sostener su aseveración, el quejoso refirió que tal disposición normativa violaba sus derechos constitucionales referentes a la seguridad jurídica, toda vez que en materia penal quedaba prohibida la labor de interpretación o integración y, en este precepto, el Código Penal para el Distrito Federal no determinaba lo que había de entenderse por dicho término; por consiguiente, argumentó que era improcedente acreditarlo al no existir presupuestos para su aplicación, pues la autoridad pretendía determinar su contenido por analogía.

Del amparo directo interpuesto tocó conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual, una vez admitida la demanda y seguidas todas las etapas procesales, dictó sentencia el 29 de marzo de 2012, en el sentido de negar el amparo y protección al quejoso.

En contra de la resolución anterior, el quejoso hizo valer recurso de revisión, en el que el agravio total consistió en que el Tribunal Colegiado omitió el estudio de constitucionalidad respecto al artículo 225, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal y sólo se limitó a atender a los aspectos de legalidad relacionados con la valoración de pruebas desahogadas en el proceso penal correspondiente.

Atento a lo anterior, se determinó enviar los autos correspondientes al Máximo Tribunal del país, el cual por acuerdo de su presidente, ordenó formar y registrar el tomo relativo bajo el número de expediente 1099/2012; asimismo, se radicó el asunto en la Primera Sala y se asignó como ponente al **señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**.




De esta forma, el asunto se resolvió por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, en la sesión correspondiente al día 23 de mayo de 2012, en que se determinó, por unanimidad de cuatro votos de los **señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas** y presidente en funciones **Guillermo I. Ortiz Mayagoitia**,² confirmar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional solicitada.

Parra arribar a tal determinación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó, en primer término, que el Tribunal Colegiado del conocimiento fue omiso en pronunciarse en relación al estudio relativo a la cuestión de constitucionalidad planteada y negó el amparo sólo por cuestiones de legalidad, lo cual hacía que el recurso intentado resultara procedente, por lo que el agravio expuesto en ese mismo sentido era fundado.

No obstante lo anterior, se declaró infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el concepto *violencia física* no era ambiguo o indeterminado, ni daba lugar a la integración de la norma penal.

Así, se señaló que la premisa anterior parte de que las normas punitivas se componen de la descripción de una conducta que configura la infracción, así como del señalamiento de la sanción que debe aplicarse a quien realice dicha conducta.


² En esta sesión estuvo ausente el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), por lo que hizo suyo el asunto el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.



De igual modo, se especificó que en el caso atinente al robo, la conducta que lo tipifica y la sanción que le corresponde, se encuentran establecidas en el artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal. Sin embargo, acorde a la realidad social, el legislador consideró necesario introducir agravantes en la comisión de dicho ilícito, como lo es en este caso la *violencia física*, la cual ocasiona que la pena se incremente cuando el autor del delito se prevale de ella para cometer el ilícito, darse a la fuga o defender lo robado.

En ese contexto, la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, estableció que la violencia física sí contaba con una definición y connotación específica, pues desde un punto gramatical, *violencia* consiste en la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo, mientras que lo físico es lo que pertenece al mundo material, lo relativo a la constitución y naturaleza del cuerpo o al aspecto exterior de alguien.

Derivado de lo antes expuesto, se determinó que aludir a la violencia física como medio de comisión del delito de robo, se traducía en sostener que dicho ilícito se cometió prevaleciéndose del uso de la fuerza sobre el cuerpo o la persona del sujeto pasivo, lo que implicaba, necesariamente, que el sujeto activo es quien debía ejercer la violencia física en el pasivo, ya sea por sí o por una tercera persona con la que comparta su propósito delictivo, y dicha violencia debía ser desplegada con la intención de anular o vencer su resistencia, ya que sólo en esas condiciones se podía afirmar que la violencia física constituyó el medio idóneo para lograr el resultado típico.




En ese orden de ideas, se resolvió que el concepto *violencia física* sí resultaba comprensible para el destinatario de la norma a fin de que pudiera autorregular su conducta, por lo que no resultaba indispensable que el legislador estableciera en la ley la definición de tal calificativa, pues ello tornaría imposible la labor legislativa.

Con base en lo anterior, se indicó que la violencia física compartía el carácter de elemento normativo de valoración cultural y, por ende, correspondía al juzgador determinar en cada caso la actualización de ésta como medio de comisión del delito.

De igual modo, la Primera Sala estableció que el juicio de valor realizado por el juez no constituía una autorización para integrar la ley penal a través de la analogía o mayoría de razón, puesto que el medio de comisión referente a la violencia física tiene una connotación clara y no amerita la necesidad de acudir a otra norma del sistema; además, se precisó que dicho juicio de valor debía estar fundado y motivado con base en parámetros objetivos que descartaran toda arbitrariedad.³

Finalmente, se concluyó que tanto la conducta punible como el medio de comisión estaban previa y especialmente establecidos en ley para salvaguardar la seguridad jurídica de los gobernados y, en lo que respecta al concepto de violencia física, éste no era indeterminado e impreciso, por lo que no daba lugar a una actuación arbitraria del órgano judicial, ya que la actualización de la violencia física que se le atribuya al sujeto activo en un caso concreto, representaba una cuestión de legalidad.

³ Véase la tesis aislada 1a. V/2006, de rubro: ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO. EN SU PRECISIÓN EL JUEZ NO DEBE RECURRIR AL USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, SINO APRECIARLOS CON UN CRITERIO OBJETIVO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, Novena Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, Febrero de 2006, pág. 628, IUS 175948.



Derivado de este asunto, se emitió la tesis aislada de rubro siguiente:

ROBO CON VIOLENCIA FÍSICA. EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.⁴

⁴ Tesis 1a. CXLVIII/2012 (10a.), Décima Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, pág. 498, *IUS* 2001489.